



Asamblea General

Distr. general
18 de septiembre de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 88º período de sesiones, 24 a 28 de agosto de 2020

Opinión núm. 51/2020, relativa a Arif Komiş, Ülkü Komiş y cuatro menores de edad cuyos nombres conoce el Grupo de Trabajo (Malasia y Turquía)*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 12 de diciembre de 2019 al Gobierno de Malasia y al Gobierno de Turquía una comunicación relativa a Arif Komiş, Ülkü Komiş y cuatro menores de edad, cuyos nombres conoce el Grupo de Trabajo. El Gobierno de Turquía respondió el 10 de febrero de 2020 y el Gobierno de Malasia lo hizo el 25 de febrero de 2020. Turquía es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero Malasia no lo es.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

* Seong-Phil Hong no participó en el examen del presente caso.



d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Arif Komiş, nacido en 1976, y Ülkü Komiş, nacida en 1982, son ciudadanos turcos y están casados. Tienen cuatro hijos menores de edad cuyos nombres conoce el Grupo de Trabajo. Todos los niños tienen la nacionalidad turca menos uno, que es apátrida porque las autoridades turcas en Kuala Lumpur se han negado repetidamente a registrar su nacimiento. Antes de su detención, la familia Komiş vivía en Kuala Lumpur (Malasia).

5. Según la fuente, el Sr. Komiş es profesor de Química en la Hibiscus International School (antes llamada Time International School) de Kuala Lumpur, donde empezó a trabajar en 2014. Es un profesor respetado, querido y apreciado por sus colegas y alumnos, así como por los padres. Tenía un permiso de residencia válido y un contrato de trabajo con la escuela. Anteriormente, había participado en la reconstrucción del sector educativo en Kazajstán y había trabajado como profesor de Química en Tayikistán, países en los que había llevado a cabo con éxito numerosos proyectos científicos internacionales. El Sr. Komiş está en posesión de un certificado de solicitante de asilo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), válido hasta el 9 de junio de 2020, en el que se indica que, hasta que se tome una decisión definitiva sobre su condición de refugiado, debe ser protegido contra el retorno forzoso a un país en el que alega que su vida y su libertad estarían amenazadas.

6. La fuente alega que entre las últimas víctimas trasladadas ilegalmente a Turquía desde el extranjero en el marco de la larga campaña transnacional del Gobierno de Turquía contra los disidentes turcos en el exilio hay seis miembros de la familia Komiş. Turquía sigue recabando la cooperación de otros Estados para detener, a menudo en operaciones encubiertas, a presuntos partidarios del movimiento Hizmet/Gülen que viven fuera del país.

7. Según la fuente, desde octubre de 2016, los nacionales de Turquía que se hallan en Malasia son víctimas de ataques sin precedentes por parte de las autoridades malasias, que actúan a petición y por cuenta del Gobierno de Turquía. El secuestro y el traslado de ciudadanos turcos cumplidores de la ley que estaban en Malasia convulsionó la comunidad turca e incitó a la mayoría de las familias turcas a solicitar asilo en terceros países. Sin embargo, el Sr. Komiş y su familia no pudieron abandonar Malasia. La Embajada de Turquía se había negado reiteradamente a registrar a su hijo recién nacido y a expedirle un pasaporte, por lo que la familia tuvo que quedarse en Malasia.

8. La fuente sostiene que existe un patrón claro de denegación de servicios consulares y de privaciones conexas que afectan a las personas críticas para con las políticas del Gobierno de Turquía que viven en el extranjero; ello incluye la anulación y confiscación de pasaportes, la negativa a prorrogar la validez de pasaportes y la negativa a expedir documentos de identidad o pasaportes a hijos de ciudadanos turcos.

Detención y privación de libertad en Malasia

9. La fuente informa de que el 28 de agosto de 2019, alrededor de las 23.30 horas, unos 30 agentes de policía irrumpieron en el domicilio de la familia Komiş en Kuala Lumpur. Detuvieron al Sr. Komiş, a su esposa y a sus cuatro hijos menores de edad. Cuatro agentes de policía informaron a la familia Komiş de que sus pasaportes habían sido anulados por el Gobierno de Turquía y de que tenían cinco minutos para prepararse para ser expulsados a Turquía de forma inminente. Mientras tanto, unos 26 policías que llevaban el rostro cubierto entraron en el domicilio y empezaron a registrarlo. La familia Komiş solo pudo

llevarse algo de ropa para los niños y abandonó el lugar. El Sr. Komiş fue esposado e introducido en un coche de policía. Después de un viaje en coche de unas dos o tres horas, los demás miembros de la familia fueron recluidos en lo que parecía ser un centro para inmigrantes (la Oficina de Inmigración de Putrajaya), separados de los demás detenidos. Al parecer, unos días antes de esos acontecimientos, el Sr. Komiş había informado al ACNUR de que un miembro del Servicio Especial de la Policía había estado tomando fotografías de la Hibiscus International School y de su vehículo, presumiblemente para preparar activamente la operación que condujo a su detención y traslado. El Sr. Komiş declaró tener miedo y pidió que se reasentara a su familia en un país más seguro.

10. Según la fuente, los amigos y familiares de las víctimas no se dieron cuenta inmediatamente de la desaparición, ya que la detención se produjo tarde por la noche del 28 de agosto de 2019. Al día siguiente, un amigo de la familia Komiş recibió un mensaje por WhatsApp de uno de los miembros de la familia que lo avisaba de que todos habían sido detenidos arbitrariamente por unos 30 funcionarios de inmigración y estaban en la Oficina de Inmigración de Putrajaya. Ese mismo día, las autoridades explicaron a algunos amigos que trataban de obtener información sobre la detención que todos los miembros de la familia Komiş habían sido detenidos con arreglo al artículo 35 (facultad de detener a una persona que ha de ser expulsada) de la Ley de Inmigración de Malasia núm. 1959/63 (Ley núm. 155).

11. Al parecer, cuando la policía malasia tomó conocimiento del mensaje de WhatsApp, el trato acordado a los miembros de la familia Komiş cambió. La policía volvió a registrar su equipaje pero no pudo encontrar ningún teléfono. Después, les facilitó documentos temporales y los obligó a subir a un avión.

12. La fuente alega que los miembros de la familia Komiş no tuvieron la posibilidad de defender sus derechos en un tribunal. Nunca fueron llevados ante una autoridad judicial ni se tuvo la intención de presentarlos ante un tribunal para que fueran juzgados por los cargos que las autoridades hubiesen podido imputarles. Inmediatamente después de su detención, la familia Komiş fue llevada y recluida por la fuerza en la Oficina de Inmigración de Putrajaya, sin ninguna posibilidad de impugnar la legalidad de su reclusión ante un tribunal con arreglo a las disposiciones pertinentes de los artículos 7 a 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Sr. Komiş permaneció bajo la custodia de las autoridades malasias hasta el día siguiente, cuando fue trasladado directamente al aeropuerto y fue expulsado ilegalmente y por la fuerza a Turquía en un avión fletado especialmente. La Sra. Komiş y sus cuatro hijos menores de edad también permanecieron bajo la custodia de las autoridades malasias hasta el día siguiente, cuando fueron expulsados ilegalmente y por la fuerza a Turquía.

13. La fuente informa de que tras la detención de los miembros de la familia Komiş, el ACNUR y otros organismos de las Naciones Unidas, así como la sociedad civil, se movilizaron para detener el traslado. Las autoridades de Malasia no dieron ningún acceso al ACNUR ni a ningún otro organismo. La sociedad civil instó, en vano, al Gobierno de Malasia a que no trasladara a la familia Komiş a Turquía.

14. La fuente señala que, el 30 de agosto de 2019, el Primer Ministro de Malasia confirmó la expulsión del Sr. Komiş y de su familia y declaró en una conferencia de prensa que “tenían pruebas que demostraban que no deberían estar en el país”, aunque no dio ningún detalle de las pruebas en manos de la policía o de otras fuerzas del orden. Más tarde ese día, el Ministro de Territorios Federales declaró ante la prensa que la policía tenía pruebas que demostraban que el Sr. Komiş “estaba involucrado” en actividades terroristas, pero no explicó en mayor detalle qué actos había cometido que pudieran calificarse de actos de terrorismo. Durante la conferencia de prensa, el Primer Ministro defendió la actuación del Gobierno, sin dar indicaciones de que tuviera conocimiento de los riesgos que corrían las víctimas en Turquía.

Traslado a Turquía

15. La fuente alega que el traslado de la familia Komiş a Turquía estaba previsto para la tarde del 29 de agosto de 2019. Las pruebas y la celeridad con que se produjeron los hechos apuntan a que la detención de la familia Komiş el 28 de agosto de 2019 se había planificado

con mucha antelación y era solo la culminación de una operación conjunta de las fuerzas del orden de Malasia y de Turquía. El Sr. Komiş fue separado de su familia y obligado a subir a bordo de un avión privado turco sin ninguna señal distintiva que lo llevó de vuelta a Turquía. En una fotografía que le tomaron inmediatamente después de ser detenido en Turquía se pueden ver marcas en su rostro, que sugieren que durante el vuelo le cubrieron la cabeza con un casco o con otra prenda. Presuntamente fue torturado durante la detención policial. Si bien el tribunal consideró que no había habido tortura ni malos tratos, el informe médico que se elaboró cuando el Sr. Komiş ingresó en la cárcel confirmó que se había recurrido a la tortura. Al parecer, se está investigando a los agentes de policía encargados de su custodia.

16. Según la fuente, la Sra. Komiş y los cuatro niños fueron obligados a embarcar en un vuelo comercial de Turkish Airlines que salió de Kuala Lumpur alrededor de las 23.05 horas del 29 de agosto de 2019 con destino a Estambul (Turquía), donde aterrizaron alrededor de las 05.05 horas del 30 de agosto de 2019.

17. Según la información recibida, en Turquía, la Agencia Anadolu describió la detención y el traslado del Sr. Komiş como una operación de la Organización Turca de Inteligencia y afirmó que “conforme a la información facilitada por fuentes de las fuerzas de seguridad el viernes 30 de agosto de 2019, las fuerzas de inteligencia detuvieron al supuesto líder de la Organización Terrorista Gulenista (FETÖ) en Malasia en una operación y lo llevaron de vuelta a Turquía. En el contexto de la constante lucha contra FETÖ, la Organización Turca de Inteligencia capturó a Arif Komiş, quien supuestamente había ocupado anteriormente altos cargos del grupo terrorista en varios países. Arif Komiş era buscado por Turquía, acusado de pertenecer a una organización terrorista armada”.

Detención en Turquía

18. Según la fuente, el Sr. Komiş fue detenido al llegar, en lo que las autoridades turcas calificaron de “operación exitosa de la Organización Turca de Inteligencia”. La Sra. Komiş y los cuatro niños fueron puestos en libertad, después de que la policía confiscara sus pasaportes. Después, viajaron a Kirkagac, en la provincia de Manisa, en Turquía Occidental, donde estaba la familia del Sr. Komiş.

19. Al parecer, el Sr. Komiş fue interrogado y la fiscalía le tomó declaración, aunque no hay información sobre los cargos que se le imputan específicamente. Lo enviaron a la prisión de Sincan, cerca de Ankara, hasta la elaboración del escrito de acusación, ya que parece que sobre él no pesaba ninguna acusación y la fiscalía debía preparar desde cero un expediente contra él. De momento, no se ha programado ninguna vista judicial en relación con su caso.

Análisis de las vulneraciones cometidas

20. La fuente afirma que la privación de libertad de la familia Komiş es arbitraria y se inscribe en las categorías I, II, III y V del Grupo de Trabajo.

21. La privación de libertad de la familia Komiş es arbitraria con arreglo a la categoría I, ya que es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique.

22. La privación de libertad de la familia Komiş es arbitraria con arreglo a la categoría II, ya que no se concedió a los interesados el derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en Malasia para escapar de la persecución. Además, expulsar a una persona a un Estado en el que corre un riesgo real de ser privada de libertad sin fundamento jurídico o de que se le deniegue el derecho a un juicio imparcial es incompatible con las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aunque parece que Malasia ha retrasado deliberadamente la ratificación de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, debería, no obstante, garantizar el respeto del principio de no devolución. El artículo 8 de la Ley de Extradición de 1992 prohíbe específicamente la extradición en determinadas circunstancias, por ejemplo cuando se ha solicitado el retorno de una persona con el fin de perseguirla o castigarla por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política.

23. La privación de libertad de la familia Komiş es arbitraria con arreglo a la categoría III, ya que no cumple ninguna norma mínima internacional del proceso con las debidas garantías. Se mantuvo a los miembros de la familia incomunicados y se les denegó el acceso a un abogado, al ACNUR y a amigos. No tuvieron ninguna posibilidad de impugnar la legalidad de su privación de libertad ante un tribunal de justicia con arreglo a las disposiciones pertinentes de los artículos 7 a 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

24. La privación de libertad de la familia Komiş es arbitraria con arreglo a la categoría V, ya que constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de opinión política o de otra índole.

25. La fuente expresa preocupación por el trato dispensado a la Sra. Komiş y a los cuatro menores de edad. Pese a que estos no eran objeto de ninguna investigación, fueron sacados por la fuerza de su domicilio, detenidos y expulsados. Habida cuenta de que Malasia es parte en la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1995, el Gobierno del país está obligado, en virtud del artículo 3, párrafo 1, de dicha Convención, a garantizar que el interés superior del niño sea una consideración primordial. El Gobierno de Malasia ha incumplido las obligaciones que le impone el artículo 37 de la Convención de velar por que los cuatro menores no fueran sometidos a malos tratos, por que su detención y privación de libertad no fueran ilegales ni arbitrarias, por que se los tratara con la humanidad y el respeto que merecía su dignidad inherente y por que tuvieran derecho a un pronto acceso a asistencia jurídica, así como el derecho a impugnar la legalidad de su privación de su libertad.

Respuesta del Gobierno de Malasia

26. El 12 de diciembre de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno de Malasia siguiendo su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que proporcionara, a más tardar el 10 de febrero de 2020, información detallada sobre las circunstancias de la detención de la familia Komiş y que aclarara las disposiciones jurídicas que la justificaban, así como la compatibilidad de esas disposiciones con las obligaciones que incumbían al Gobierno en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, de los tratados ratificados por el Estado.

27. El 4 de febrero de 2020, el Gobierno de Malasia, de conformidad con el párrafo 15 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, solicitó una prórroga del plazo, que le fue concedida. El Gobierno presentó su respuesta el 25 de febrero de 2020. Lamenta que la información presentada en el resumen de la comunicación sea inexacta, y alega que, el 6 de febrero de 2019, el Gobierno de Turquía solicitó oficialmente a la Real Policía de Malasia que detuviera al Sr. Komiş y lo repatriara a Turquía a fin de poder emprender actuaciones judiciales contra él por su colaboración con FETÖ, con arreglo a la legislación nacional turca.

28. En consecuencia, el Gobierno de Turquía revocó los pasaportes del Sr. Komiş y de su esposa el 20 de marzo de 2019. El Gobierno de Malasia observa que, desde ese momento, podían ser expulsados con arreglo al artículo 56, párrafo 2, de la Ley de Inmigración núm. 1959/63.

29. Así pues, el 28 de agosto de 2019, el Sr. Komiş y los miembros de su familia fueron detenidos por las autoridades malasias con arreglo al artículo 35 de la Ley de Inmigración núm. 1959/63. Esta disposición permite detener sin orden judicial a una persona que ha de ser expulsada de Malasia en virtud de dicha Ley, así como mantenerla en detención hasta 30 días a la espera de la decisión relativa a la expulsión. En el momento de la detención, el Sr. Komiş y los miembros de su familia no presentaron ningún documento, salvo sus pasaportes turcos.

30. El Gobierno explica además que, el 29 de agosto de 2019, el Sr. Komiş y su familia fueron repatriados a Turquía tras la emisión de la orden de expulsión con arreglo a la Ley de Inmigración núm. 1959/63. La detención y la privación de libertad del Sr. Komiş y de su familia no fueron arbitrarias, puesto que todas las medidas tomadas por las autoridades malasias respecto de la familia Komiş se ajustaron a la legislación vigente en Malasia. Por

ello, el Gobierno refuta categóricamente la alegación de que, desde octubre de 2016, los nacionales de Turquía que se hallan en Malasia son víctimas de ataques sin precedentes por parte de las autoridades malasias, que actúan a petición y por cuenta del Gobierno de Turquía.

31. Volviendo a la cuestión de si la repatriación de la familia Komiş se ajusta a las obligaciones que incumben a Malasia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, el Gobierno sostiene que Malasia conoce perfectamente el principio establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el principio de no devolución.

32. El Gobierno alega que, pese a no ser parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Malasia está obligada a respetar el principio de no devolución en virtud del derecho internacional consuetudinario. En este sentido, tiene presente este principio en todas las decisiones relativas a la repatriación de una persona a su país de origen. El Gobierno menciona que la carga de la prueba recae en la persona que afirma que su expulsión, devolución, entrega o extradición a otro Estado la haría estar en peligro de ser sometida a una desaparición forzada. Del mismo modo, un Estado tiene la responsabilidad de recopilar y analizar toda la información pertinente disponible, así como los datos que la respalden, incluida la facilitada por la persona afectada, a fin de determinar si hay razones fundadas para creer que dicha persona estaría en peligro de ser sometida a una desaparición forzada si un Estado decide expulsarla, devolverla, entregarla o extraditarla a otro Estado.

33. En este sentido, el Gobierno recalca que no recibió información ni pruebas que demostraran la existencia de razones fundadas para creer que la familia Komiş estaría en peligro de ser objeto de persecución en caso de ser repatriada a Turquía. Antes de su detención, el Sr. Komiş —titular de un permiso de trabajo con arreglo a la Ley de Inmigración núm. 1959/63— no informó en ningún momento al Gobierno ni a ningún otro organismo gubernamental de las amenazas que pesaban sobre él de ser objeto de persecución en caso de regresar a su país.

34. Además, el Gobierno sostiene que el hecho de que una persona sin documentos de viaje válidos no pueda entrar o permanecer en un país soberano que no sea su país de origen es universalmente aceptado. La presencia del Sr. Komiş y de su esposa en Malasia era ilegal desde el momento en que el Gobierno de Turquía revocó sus pasaportes. Por lo tanto, la repatriación del Sr. Komiş y de su familia fue conforme con la legislación malasia y con las normas y los principios internacionales.

35. Por lo que respecta a los cuatro hijos del Sr. Komiş, el Gobierno reafirma su determinación de cumplir las obligaciones que le incumben con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño, incluida la obligación de garantizar y proteger los derechos de los niños a no ser sometidos a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni ser privados de libertad arbitrariamente, como se establece en el artículo 37 de la Convención. El Gobierno hace hincapié en que dio prioridad al interés superior de los hijos del Sr. Komiş, como demuestra el hecho de que en ningún momento fueron separados de sus padres, ni siquiera durante su repatriación a Turquía.

36. El Gobierno destaca que las medidas adoptadas por las autoridades malasias contra el Sr. Komiş y los miembros de su familia se establecieron de conformidad con el derecho interno. Reitera que, como actor estatal responsable en la esfera de los derechos humanos, ha mantenido una buena relación de trabajo con los grupos de trabajo de las Naciones Unidas y está firmemente decidido a proseguir sus esfuerzos para garantizar, promover y proteger los derechos humanos en el país.

Respuesta del Gobierno de Turquía

37. El 12 de diciembre de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno de Turquía siguiendo su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que proporcionara, a más tardar el 10 de febrero de 2020, información detallada sobre las circunstancias de la privación de libertad de la familia Komiş y que aclarara las disposiciones jurídicas que justificaban el mantenimiento de la privación de libertad del Sr. Komiş, así como la compatibilidad de esas disposiciones con las obligaciones que incumbían al Gobierno en virtud del derecho internacional de los

derechos humanos y, en particular, de los tratados ratificados por el Estado. Además, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno de Turquía a que velara por la integridad física y mental de la familia Komiş.

38. El Gobierno de Turquía presentó su respuesta el 10 de febrero de 2020 y reafirmó que Turquía, como Estado democrático regido por el estado de derecho y miembro fundador del Consejo de Europa, defendía los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia. Turquía seguía luchando contra varias organizaciones terroristas en el marco de su Constitución y su legislación, cumpliendo sus obligaciones internacionales y ateniéndose a los principios fundamentales de un Estado democrático. A continuación, el Gobierno recordó sus disposiciones jurídicas nacionales en materia de derechos humanos.

39. El Gobierno expuso en líneas generales las amenazas terroristas a las que se enfrentaba el país y las medidas que se habían adoptado para resolver los problemas de seguridad que planteaban las organizaciones terroristas. El Gobierno presentó información general, en particular en relación con la presunta organización terrorista armada. También hizo referencia al intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 y señaló que había investigaciones en curso y juicios pendientes contra miembros de la organización, en relación con la presunta tentativa de derrocar al Gobierno.

40. El Gobierno sostiene que el Sr. Komiş está privado de libertad por decisión de los tribunales competentes. Todas las actuaciones que dieron lugar a su detención y privación de libertad se llevaron a cabo de conformidad con la legislación pertinente y con las obligaciones internacionales de Turquía. A raíz de la orden de detención contra el Sr. Komiş, dictada por el Tribunal núm. 8 de Ankara el 26 de julio de 2019, este fue detenido en el aeropuerto Atatürk de Estambul el 30 de agosto de 2019 tras su expulsión por Malasia.

41. Por orden de la Fiscalía General de Ankara, el Sr. Komiş fue trasladado a Ankara el 31 de agosto de 2019. Ese mismo día, se le hizo un reconocimiento médico conforme a los requisitos legales del Código de Procedimiento Penal. El 6 de septiembre de 2019 compareció ante un juez, y el Tribunal núm. 5 de Ankara ordenó su ingreso en prisión preventiva.

42. El Gobierno sostiene que la acusación se presentó el 15 de octubre de 2019. Actualmente, el caso está siendo examinado por el Tribunal Penal núm. 14 de Ankara. La primera vista se celebró el 22 de noviembre de 2019, y la siguiente debía celebrarse el 13 de febrero de 2020. Durante todo el tiempo que estuvo detenido y privado de libertad, el Sr. Komiş se sometió regularmente a reconocimientos médicos y tuvo acceso a un abogado.

43. El Gobierno sostiene que la orden de detención dictada por el Tribunal núm. 8 de Ankara se basó en la firme sospecha de que se había cometido un delito contemplado en el artículo 100/3-a del Código Penal de Turquía. El Sr. Komiş era sospechoso de ser miembro de la Organización Terrorista Gulenista (FETÖ), y el Gobierno volvió a describir las actividades de esta organización y el papel que desempeñó en los acontecimientos del 15 de julio de 2016. El Gobierno especifica que el Tribunal Constitucional de Turquía también consideró, en varias sentencias dictadas en relación con demandas individuales, que FETÖ era una organización terrorista armada.

44. Por lo que respecta a las acusaciones que pesan contra el Sr. Komiş, el Gobierno alega que este fue detenido a su llegada al aeropuerto Atatürk de Estambul en cumplimiento de la orden de detención. Fue trasladado de Estambul a Ankara por orden de la Fiscalía General de Ankara. Estuvo detenido durante cuatro días; el Tribunal núm. 2 de Ankara prorrogó una vez este período el 3 de septiembre de 2019, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo (Ley núm. 3713), que dispone que la detención no podrá prolongarse más de 48 horas (o de cuatro días para los delitos cometidos colectivamente) a partir del momento de la detención. La duración de la detención, con sujeción a los plazos establecidos en la primera frase del artículo 19, podrá prorrogarse hasta dos veces en función de las dificultades para reunir pruebas o de la complejidad del caso.

45. Durante su detención, el Sr. Komiş tuvo acceso a un abogado designado por el Colegio de Abogados de Ankara, de conformidad con el artículo 150 del Código de

Procedimiento Penal. No solicitó por escrito elegir a su abogado. El abogado nombrado por el Colegio de Abogados estuvo presente cuando el Sr. Komiş prestó declaración ante el Departamento de Policía, así como ante el Fiscal General y el Tribunal núm. 5 de Ankara. En todas las etapas del proceso de investigación, el Sr. Komiş fue informado de sus derechos y de los cargos que se le imputaban y se le dio la oportunidad de informar a un familiar. También se le practicaron reconocimientos médicos con regularidad. Según los partes médicos, el Sr. Komiş no sufrió ningún tipo de maltrato ni tortura.

46. En consecuencia, el Gobierno concluye que la detención del Sr. Komiş se ajusta a los requisitos legales de las leyes pertinentes, en particular el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Lucha contra el Terrorismo.

47. En cuanto al fundamento jurídico de la privación de libertad del Sr. Komiş, el Gobierno afirma que, el 6 de septiembre de 2019, el Tribunal núm. 5 de Ankara ordenó la prisión preventiva sobre la base de pruebas concretas y convincentes que estaban respaldadas por la declaración del Sr. Komiş de que estaba afiliado a FETÖ. Habida cuenta de la gravedad de los cargos que se imputaban al Sr. Komiş, y observando que este no había podido indicar una dirección en relación con su lugar de residencia en Turquía, el Tribunal consideró que existía riesgo de fuga. En consecuencia, estimo que, en el presente caso, las medidas de control judicial serían insuficientes y ordenó que el Sr. Komiş fuera puesto en prisión preventiva.

48. El Gobierno sostiene que el escrito de acusación de 15 de octubre de 2019, aceptado por el Tribunal Penal núm. 14 de Ankara el 22 de noviembre de 2019, también contiene elementos concretos que respaldan las sospechas de que el Sr. Komiş pertenece a FETÖ. Teniendo en cuenta esos elementos, el Tribunal dictaminó la prolongación de la detención.

49. El Gobierno explica que, según las declaraciones del Sr. Komiş, este había empezado a frecuentar residencias de FETÖ cuando estaba en la escuela secundaria. Desde entonces, siempre había vivido en casas y residencias afiliadas a FETÖ. Después, había trabajado como profesor en escuelas afiliadas a FETÖ en Kazajistán. También se ha establecido que el Sr. Komiş poseía una cuenta de depósito en el Banco Asya, una institución clave que proporcionaba recursos financieros a FETÖ. En varias decisiones judiciales se ha establecido que, el 25 de diciembre de 2013, el líder de la organización terrorista dio instrucciones a los miembros de FETÖ para que invirtieran dinero en el Banco Asya a fin de mejorar la situación financiera del banco y aumentar el volumen de las transacciones.

50. El Gobierno sostiene que el examen de la actividad de la cuenta del Sr. Komiş por el Consejo de Investigación de Delitos Financieros demuestra que sus inversiones aumentaron considerablemente y que su actividad financiera se intensificó después del 25 de diciembre de 2013. Por lo tanto, el Sr. Komiş actuó siguiendo las instrucciones del líder de FETÖ a fin de aumentar el volumen de las transacciones del Banco Asya y contribuir a los recursos financieros de la organización terrorista.

51. Además, en el escrito de acusación se establece que el Sr. Komiş utilizó un dispositivo virtual Android para acceder a la aplicación ByLock de su ordenador personal a través de su cuenta de correo electrónico. El hecho de instalar y utilizar ByLock constituye una prueba crucial que demuestra su pertenencia a la organización, dado que esta aplicación se desarrolló para la comunicación confidencial entre sus miembros y no se permitía el acceso a ella por parte del público en general.

52. Según el Gobierno, ByLock es una aplicación destinada exclusivamente a establecer una comunicación altamente cifrada entre los miembros de FETÖ. Funciona cifrando cada mensaje, y todos los mensajes se envían con un cifrado diferente. Se presentó como una aplicación accesible a todo el mundo con la finalidad de ponerla a disposición de los miembros de FETÖ. Sin embargo, después de facilitar brevemente su acceso generalizado en Internet, se obligó a quienes deseaban descargarla a acceder a ella a través de una red virtual privada, por Bluetooth o mediante una memoria externa, a fin de ocultar la identidad de los usuarios. No bastaba con inscribirse en la aplicación para establecer contacto con los usuarios del sistema, si no que las dos partes que quisieran entablar una comunicación tenían que añadir nombres de usuario y códigos, que se proporcionaban fundamentalmente cara a cara o a través de un intermediario (un mensajero, otro usuario de ByLock, etc.).

Solo cuando ambos usuarios se habían añadido mutuamente a sus contactos podían empezar a intercambiar mensajes. Por lo tanto, una persona que no estuviera vinculada a FETÖ no podía descargar la aplicación en su teléfono móvil ni comunicarse con otros usuarios.

53. El Gobierno señala la sentencia motivada de la 16ª Sala de lo Penal del Tribunal de Casación, de 24 de abril de 2017, en la que se examinaron las características de ByLock y se concluyó que existían pruebas concretas que demostraban que ese sistema de comunicación era una red programada para ser utilizada por miembros de FETÖ y que únicamente la usaban miembros de esa organización.

54. Además, la sentencia de la Sala de lo Penal de la Asamblea Plenaria del Tribunal de Casación (expediente núm. 2017/956, sentencia núm. 2017/370, de 26 de septiembre de 2017) especifica que la utilización de la aplicación constituirá una prueba del vínculo del usuario con FETÖ, ya que ese sistema de comunicación es una red que solo está a disposición de los miembros de FETÖ y que únicamente utilizan ellos. Además, en la sentencia de la Sala de lo Penal de la Asamblea Plenaria del Tribunal de Casación (expediente núm. 2018/16-419, sentencia núm. 2018/661) se establece claramente el vínculo entre FETÖ y los usuarios de ByLock.

55. Por consiguiente, el Gobierno concluye que la privación de libertad del Sr. Komiş se basa en elementos concretos que respaldan la firme sospecha de que está involucrado en un delito contemplado en el artículo 100/3-a del Código Penal de Turquía.

56. El Gobierno destaca que el proceso judicial relativo al Sr. Komiş está en curso. La causa se encuentra actualmente ante el Tribunal Penal. Cuando se dicte sentencia, el Sr. Komiş podrá recurrirla ante el Tribunal Regional de Apelación y, posteriormente, ante el Tribunal de Casación. También tendrá derecho a presentar una demanda individual ante el Tribunal Constitucional.

57. Además, en la legislación turca se contempla el derecho a obtener reparación. El Sr. Komiş tiene la posibilidad de solicitar una indemnización con arreglo al artículo 141 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. De conformidad con la legislación turca, para que pueda concederse una indemnización a una persona esta debe solicitarla. Cabe destacar también que el mecanismo de indemnización introducido en el artículo 141 del Código de Procedimiento Penal está reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un recurso interno eficaz.

58. El Gobierno subraya que el requisito del agotamiento de los recursos internos es una norma generalmente reconocida en el derecho internacional. La obligación de agotar los recursos internos forma parte del derecho internacional consuetudinario y está aceptada en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia; véase *Interhandel (Suiza c. los Estados Unidos de América)*, fallo de 21 de marzo de 1959. En el presente caso, no se han agotado los recursos internos.

59. A la luz de las explicaciones proporcionadas, el Gobierno aduce que las alegaciones comunicadas por la fuente al Grupo de Trabajo en relación con la situación del Sr. Komiş son infundadas y, por lo tanto, deberían desestimarse.

Deliberaciones

60. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y a los Gobiernos de Malasia y Turquía la información recibida y aprecia la cooperación y el compromiso de todas las partes en esta cuestión.

61. Para determinar si la privación de libertad del Sr. Komiş y su familia es arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia acerca de su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. La mera afirmación del Gobierno de que se han seguido los procedimientos legales no basta para refutar las presunciones de la fuente (A/HRC/19/57, párr. 68).

62. Observando que se han formulado alegaciones contra el Gobierno de Malasia y el Gobierno de Turquía, el Grupo de Trabajo procederá a examinarlas por separado.

Alegaciones contra el Gobierno de Malasia

63. El Grupo de Trabajo observa que no se cuestiona que la familia Komiş fuera detenida por las autoridades malasias el 28 de agosto de 2019. Tampoco se cuestionan los motivos de la detención, puesto que tanto la fuente como el Gobierno de Malasia afirman que el Gobierno de Turquía solicitó la extradición del Sr. Komiş y revocó los pasaportes de la familia, por lo que las autoridades malasias tenían que expulsarlos del país con arreglo al artículo 56, párrafo 2, de la Ley de Inmigración núm. 1959/63. El Gobierno de Malasia niega que estuviera al corriente de que el Sr. Komiş hubiera expresado temores en cuanto a su devolución a Turquía.

64. Sin embargo, el Grupo de Trabajo observa que el Gobierno de Malasia ha decidido no responder a las alegaciones de la fuente de que los miembros de la familia Komiş, incluidos los cuatro menores de edad, fueron detenidos durante la noche por un gran número de agentes con el rostro cubierto. El Grupo de Trabajo no puede considerar que el momento y la forma en que se llevó a cabo la detención fueran proporcionales y se ajustaran a lo dispuesto en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

65. Además, el Gobierno no ha respondido a las alegaciones de que los miembros de la familia Komiş estuvieron en régimen de incomunicación hasta su traslado forzoso a Turquía. Aunque parece que pudieron enviar un mensaje informando a unos amigos de su paradero, no se les permitió tener contacto con un abogado, y las autoridades malasias no reconocieron su detención, dejándoles así fuera de la protección de la ley, en contravención del artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo ha considerado sistemáticamente que la privación de libertad en régimen de incomunicación atenta contra el derecho a comparecer ante un tribunal y a impugnar la legalidad de la detención¹. El control judicial de la detención es una salvaguardia fundamental de la libertad personal² y un elemento esencial para garantizar que la detención tenga fundamento jurídico. Habida cuenta de que la familia Komiş no pudo impugnar su privación de libertad, ni personalmente ni por medio de un abogado de su elección, también vio vulnerado su derecho a un recurso efectivo, reconocido en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

66. Asimismo, el Grupo de Trabajo ha sostenido sistemáticamente que todas las formas de detención, también durante el curso de procedimientos migratorios, deben ser ordenadas y aprobadas por un juez u otra autoridad judicial, y que toda persona detenida tiene derecho a comparecer sin demora ante un tribunal³. Si bien el Grupo de Trabajo admite que las autoridades malasias respetaron las disposiciones de las leyes nacionales al detener a la familia Komiş, su función también consiste en evaluar dichas leyes a fin de determinar si se han cumplido las normas internacionales pertinentes⁴, lo cual no ocurre en el presente caso.

67. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que la detención y privación de libertad de la familia Komiş fue arbitraria y se inscribe en la categoría I, ya que no fue autorizada por una autoridad judicial, se mantuvo a la familia en régimen de incomunicación y se le impidió impugnar la legalidad de su privación de libertad, en contravención del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo está particularmente preocupado por la privación de libertad y la expulsión de la Sra. Komiş y los cuatro menores de edad, uno de los cuales ni siquiera tiene la nacionalidad turca, y concluye que se vulneró el artículo 37 b) de la Convención sobre los Derechos del Niño.

¹ Opiniones núms. 11/2018, 79/2017, 46/2017 y 45/2017.

² Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, párr. 3.

³ Deliberación revisada núm. 5 del Grupo de Trabajo (A/HRC/39/45, anexo), párr. 13. Véanse también A/HRC/13/30, párr. 61; Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principio 4; E/CN.4/1999/63/Add.4, para. 51; y E/CN.4/2003/8/Add.2, párr. 64 a); así como A/HRC/13/30/Add.2, párr. 79 e).

⁴ Opiniones núms. 33/2015, 15/2017, 16/2017 y 30/2017.

68. Además, el Grupo de Trabajo observa que, si bien el Gobierno de Malasia reconoce que recibió una solicitud de las autoridades turcas para la extradición del Sr. Komiş, en el presente caso optó por no recurrir al proceso judicial aceptado, que hubiera garantizado el respeto de las debidas garantías procesales del Sr. Komiş y hubiera permitido que este impugnara la legalidad del proceso en un tribunal de justicia. Por lo tanto, la privación de libertad de los miembros de la familia Komiş se llevó a cabo sin tener en cuenta los procedimientos de extradición establecidos, negándoles así el derecho a un juicio imparcial.

69. Además, el Grupo de Trabajo recuerda la alegación, no refutada, de que el Ministro de Territorios Federales declaró ante la prensa que la policía tenía pruebas que demostraban que el Sr. Komiş “estaba involucrado” en actividades terroristas, sin explicar en mayor detalle qué actos había cometido que pudieran calificarse de actos de terrorismo. El Grupo de Trabajo observa que, dado que las autoridades malasias decidieron eludir los procedimientos de extradición establecidos, al Sr. Komiş se le negó la posibilidad de impugnar las acusaciones en su contra antes de ser expulsado de Malasia y, por consiguiente, considera que las autoridades malasias habían prejuzgado el asunto y no estaban respondiendo únicamente a una solicitud de extradición. El Grupo de Trabajo considera que se denegó al Sr. Komiş el derecho a la presunción de inocencia, lo que constituye una vulneración del artículo 14, párrafo 2, del Pacto.

70. Por ello, el Grupo de Trabajo considera también que la privación de libertad de la familia Komiş fue arbitraria y se inscribe en la categoría III.

71. Por último, el Gobierno de Malasia incumplió la obligación que le imponen los artículos 5 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño al devolver a la familia Komiş a otro Estado cuando había razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros malos tratos y a detención arbitraria. El Grupo de Trabajo no puede aceptar el argumento del Gobierno de que no tenía conocimiento de los temores expresados por el Sr. Komiş en relación con su retorno a Turquía, dado que todos los miembros de la familia estaban en posesión de documentos expedidos por el ACNUR. Si en el presente caso se hubieran seguido los procedimientos de extradición adecuados, las autoridades malasias habrían evaluado debidamente si la expulsión de la familia Komiş infringiría la prohibición de no devolución. El Grupo de Trabajo desea subrayar que la responsabilidad de velar por que no se infrinja la prohibición de no devolución recae en el Estado que contempla la posibilidad de expulsar a una persona. En el presente caso, las autoridades malasias incumplieron su deber de no devolución. Al formular esta conclusión, el Grupo de Trabajo observa particularmente que el Gobierno no ha respondido a la alegación de que al ACNUR no se le permitió tener acceso a la familia Komiş durante su privación de libertad, y recuerda que las organizaciones como el ACNUR deben tener libre acceso a todas las personas privadas de libertad por motivos de inmigración⁵.

72. Así pues, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno de Malasia es responsable de sus propios actos en la detención, privación de libertad y expulsión de la familia Komiş, así como de las vulneraciones ulteriores de sus derechos en Turquía. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno de Malasia a que tome todas las medidas necesarias para lograr la puesta en libertad inmediata e incondicional del Sr. Komiş. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

Alegaciones contra el Gobierno de Turquía

73. Como cuestión preliminar, el Grupo de Trabajo observa que la situación del Sr. Komiş y su familia queda comprendida en el ámbito de las medidas de suspensión que Turquía ha adoptado en relación con el Pacto. El 21 de julio de 2016, el Gobierno de Turquía informó al Secretario General de las Naciones Unidas de que había declarado el estado de emergencia por tres meses, en respuesta a los graves peligros que se cernían sobre

⁵ Deliberación revisada núm. 5 (A/HRC/39/45, anexo), párr. 47.

la seguridad y el orden públicos, que equivalían a una amenaza contra la vida de la nación en el sentido del artículo 4 del Pacto⁶.

74. El Grupo de Trabajo, si bien reconoce que se notificaron esas medidas de suspensión, subraya que, en el cumplimiento de su mandato, también está autorizado, en virtud del párrafo 7 de sus métodos de trabajo, a remitirse a las normas internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y al derecho internacional consuetudinario. Además, en el presente caso, los artículos 9 y 14 del Pacto son los más pertinentes en lo que se refiere a la presunta privación de libertad del Sr. Komiş y su familia. Como ha señalado el Comité de Derechos Humanos, los Estados partes que suspendan la aplicación de los artículos 9 y 14 deben asegurarse de que tal suspensión se adopte en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación real⁷.

75. Como cuestión preliminar adicional, el Grupo de Trabajo desea aclarar que las normas de procedimiento por las que se rige su examen de las comunicaciones sobre presuntos casos de detención arbitraria figuran en sus métodos de trabajo. No hay en ellos ninguna disposición que impida al Grupo de Trabajo examinar comunicaciones so pretexto de no haberse agotado los recursos internos del país de que se trate. Asimismo, el Grupo de Trabajo ha ratificado, en su jurisprudencia, que no cabe imponer a los autores de una comunicación el requisito de haber agotado los recursos internos para que la comunicación sea considerada admisible⁸.

76. Como última cuestión preliminar, el Grupo de Trabajo observa que la Sra. Komiş y los cuatro menores de edad cuyos nombres conoce el Grupo de Trabajo han sido puestos en libertad. Sin embargo, el Grupo de Trabajo señala que, de conformidad con el párrafo 17 a) de sus métodos de trabajo, “no obstante la puesta en libertad de la persona en cuestión, se reserva el derecho de emitir una opinión, atendiendo a las circunstancias de cada caso, sobre el carácter arbitrario o no de la privación de libertad”. En el presente caso, el Grupo de Trabajo estima que las alegaciones formuladas por la fuente son graves, por lo que procederá a emitir su opinión.

77. En cuanto a las alegaciones específicas contra el Gobierno de Turquía, el Grupo de Trabajo observa que la fuente ha afirmado que la privación de libertad del Sr. Komiş y su familia se inscribe en las categorías I, II, III y V del Grupo de Trabajo. El Gobierno ha negado esas alegaciones.

i. Categoría I

78. El Grupo de Trabajo recuerda que considera que es arbitraria y se inscribe en la categoría I toda detención que carezca de fundamento jurídico. En el presente caso, por lo tanto, el Grupo de Trabajo debe examinar las circunstancias que concurren en la detención del Sr. Komiş y su familia, y observa que fueron detenidos en Malasia el 28 de agosto de 2019 y trasladados por la fuerza a Turquía, país al que llegaron el 30 de agosto de 2019 y donde fueron detenidos por las autoridades turcas. Observa que estas afirmaciones no han sido refutadas por el Gobierno de Turquía, que ha explicado que el Sr. Komiş fue detenido tras su expulsión de Malasia.

79. Sin embargo, el Gobierno no ha dado ninguna explicación sobre por qué la Sra. Komiş y los cuatro niños fueron detenidos tras su expulsión por la fuerza a Turquía. Aunque parece que su privación de libertad a su llegada a Turquía fue breve, se trata no obstante de una privación de libertad⁹ y el Grupo de Trabajo considera que fue arbitraria

⁶ Notificación del depositario C.N.580.2016.TREATIES-IV.4.

⁷ Véase la observación general núm. 29 (2001) del Comité, relativa a la suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, párr. 4. Véanse también la observación general núm. 32 (2007) del Comité, relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 6; su observación general núm. 34 (2011), relativa a la libertad de opinión y la libertad de expresión, párr. 5; y su observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y la seguridad personales, párrs. 65 y 66.

⁸ Opiniones núms. 19/2013 y 11/2000. Véanse también las opiniones núms. 41/2017, párr. 73; 38/2017, para. 67; 11/2018, para. 66; 20/2019, párr. 81; y 53/2019, párr. 59.

⁹ Opinión núm. 67/2017 y deliberación núm. 9 (A/HRC/22/44, sección III).

dado que las autoridades turcas no invocaron fundamento jurídico alguno que la justificara, en contravención del artículo 9 del Pacto.

80. Además, las autoridades turcas también son responsables de la detención y privación de libertad de la Sra. Komiş y los cuatro menores de edad en Malasia. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo concluye que esta privación de libertad carecía de fundamento jurídico y, en consecuencia, fue arbitraria y se inscribe en la categoría I. El Grupo de Trabajo está particularmente preocupado por la detención y privación de libertad de cuatro menores de edad, que tuvieron que vivir la experiencia traumatizante de ser expulsados de Malasia por la fuerza a petición de las autoridades turcas. El Grupo de Trabajo considera que este trato pone de manifiesto la existencia de indicios razonables de una vulneración por Turquía de los artículos 3, párrafo 1, 22 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

81. En cuanto a las alegaciones relativas al Sr. Komiş, el Grupo de Trabajo observa que el Gobierno no ha reconocido su traslado forzoso ni el de su familia desde Malasia. El Sr. Komiş, su esposa y sus hijos no llegaron a Turquía el 30 de agosto de 2019 por su propia voluntad. El Gobierno de Turquía tuvo la oportunidad de respetar sus garantías procesales por medio de un procedimiento de extradición adecuado desde Malasia, pero decidió no hacerlo y eludir los procedimientos de extradición. Por consiguiente, es responsable de su privación de libertad arbitraria en Malasia.

82. Además, el Grupo de Trabajo observa que el Sr. Komiş fue detenido por las autoridades turcas a su llegada y no fue llevado ante ninguna autoridad judicial hasta el 3 de septiembre de 2019, es decir, unos cuatro días después de ser detenido en Turquía. Como ha mantenido invariablemente el Grupo de Trabajo¹⁰, para considerar que una privación de libertad es efectivamente legal, la persona detenida debe tener derecho a impugnar la legalidad de esta ante un tribunal, según se contempla en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto.

83. El Grupo de Trabajo recuerda que, con arreglo a los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal es un derecho humano autónomo que es esencial para preservar la legalidad en una sociedad democrática¹¹. Este derecho, que constituye una norma imperativa del derecho internacional, se aplica a todas las formas de privación de libertad¹², “incluida no solo la detención a efectos de un proceso penal, sino también las situaciones de detención bajo el orden jurisdiccional administrativo y de otro tipo, como la detención militar, la detención de seguridad [y] la detención en virtud de medidas de lucha contra el terrorismo”¹³.

84. El Grupo de Trabajo considera además que el control judicial de la detención es una salvaguardia fundamental de la libertad personal¹⁴ y un elemento esencial para garantizar que la detención tenga fundamento jurídico. En el presente caso, el Sr. Komiş no fue presentado ante un juez hasta unos cuatro días después de su detención, y el Gobierno se ha limitado a citar el cumplimiento de su legislación nacional como explicación de este retraso. El Grupo de Trabajo recuerda una vez más que una suspensión con arreglo al artículo 4 del Pacto no puede justificar una privación de libertad que no sea razonable o necesaria¹⁵, y considera que, dado que el Sr. Komiş no fue presentado ante una autoridad judicial sin dilación, no puede decirse que su privación de libertad fuera conforme a derecho, ya que vulneró el artículo 9, párrafo 4, del Pacto.

85. Además, dado que durante esos cuatro días en que permaneció privado de libertad el Sr. Komiş no pudo impugnar su privación de libertad, también se vulneró su derecho a un

¹⁰ Opiniones núms. 1/2017, 6/2017, 8/2017, 30/2017, 2/2018, 4/2018, 42/2018, 43/2018, 79/2018 y 49/2019.

¹¹ A/HRC/30/37, párrs. 2 y 3.

¹² *Ibid.*, párr. 11.

¹³ A/HRC/30/37, anexo, párr. 47 a).

¹⁴ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, párr. 3.

¹⁵ Véase Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 66. Véase también la observación general núm. 29 del Comité, párr. 3.

recurso efectivo, consagrado en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

86. Por último, como explica el Comité de Derechos Humanos, “un plazo de 48 horas es normalmente suficiente para trasladar a la persona y preparar la vista judicial; todo plazo superior a 48 horas deberá obedecer a circunstancias excepcionales y estar justificado por ellas”¹⁶. El Grupo de Trabajo constata que el Gobierno no ha presentado ninguna justificación en ese sentido, por lo que también se ha vulnerado el artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

87. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Grupo de Trabajo concluye que la privación de libertad del Sr. Komiş fue arbitraria y se inscribe en la categoría I.

ii. Categoría II

88. La fuente ha sostenido además que la privación de libertad del Sr. Komiş y de su familia se inscribe en la categoría II, ya que no se les concedió el derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en Malasia para escapar de la persecución. Sin embargo, el Grupo de Trabajo observa que el Gobierno de Turquía ha afirmado que el Sr. Komiş fue detenido y posteriormente privado de libertad por su lealtad al movimiento Gülen, que quedó demostrada por el hecho de que hubiera frecuentado una residencia de FETÖ y se hubiera alojado en ella, tuviera una cuenta en el Banco Asya y hubiera utilizado la aplicación ByLock en su ordenador y su teléfono.

89. En el presente caso, como en muchos otros casos anteriores¹⁷, el Grupo de Trabajo observa que las alegaciones presentadas por el Gobierno contra el Sr. Komiş, se refieren fundamentalmente a su presunta lealtad al grupo gulenista, que supuestamente quedaría demostrada por actividades cotidianas tan habituales como poseer una cuenta bancaria y utilizar una aplicación de comunicaciones. En relación con este último aspecto, el Gobierno ha proporcionado información detallada sobre la manera en que la organización terrorista FETÖ en general ha usado esa aplicación. Sin embargo, no ha explicado de qué manera el presunto uso de la aplicación por parte del Sr. Komiş podría equipararse a un acto delictivo. El Gobierno tampoco ha presentado ninguna prueba de que el Sr. Komiş fuera efectivamente miembro de FETÖ solo por el hecho de poseer una cuenta en el Banco Asya o de haber vivido en una residencia afiliada al movimiento Gülen hace mucho tiempo.

90. El Grupo de Trabajo tiene presente el estado de emergencia que se declaró en Turquía. No obstante, a pesar de que el Consejo de Seguridad Nacional de Turquía ya había reconocido como organización terrorista en 2015 a FETÖ, el grupo gulenista, la sociedad turca en general no sabía, antes de la tentativa de golpe de Estado de julio de 2016, que la organización estuviera dispuesta a utilizar la violencia. Como señaló el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa:

“A pesar de las fuertes sospechas que albergan diversos sectores de la sociedad turca acerca de sus motivaciones y su *modus operandi*, el movimiento de Fethullah Gülen parece llevar décadas funcionando y haber gozado, hasta una fecha bastante reciente, de una considerable libertad para implantarse, de manera generalizada y respetable, en todos los sectores de la sociedad turca, como, entre otros, en las instituciones religiosas, la educación, la sociedad civil y los sindicatos, los medios de comunicación y los sectores financiero y empresarial. Es indudable asimismo que muchas organizaciones vinculadas a ese movimiento, que fueron clausuradas a partir del 15 de julio, hasta esa fecha funcionaban de manera abierta y legal. Parece que hay acuerdo general en cuanto a que sería excepcional que, de un modo u otro, un ciudadano turco nunca hubiese tenido ningún tipo de contacto o trato con ese movimiento¹⁸.”

91. Habida cuenta de ello, el Comisario para los Derechos Humanos señaló asimismo que era preciso, “al tipificar como delito la pertenencia y el apoyo a esta organización, distinguir entre quienes realizaron actividades ilegales y quienes eran simpatizantes o

¹⁶ Véase la observación general núm. 35 del Comité, párr. 33.

¹⁷ Opiniones núms. 42/2018, 44/2018, 29/2020 y 30/2020.

¹⁸ Memorandum on the human rights implications of the measures taken under the state of emergency in Turkey, CommDH(2016)35, 7 de octubre de 2016, párr. 20.

partidarios de ella o eran miembros de entidades establecidas legalmente y afiliadas al movimiento y no eran conscientes de la voluntad que tenía este de recurrir a la violencia”¹⁹.

92. El Grupo de Trabajo observa que las acusaciones de que el Sr. Komiş era miembro del grupo gulenista se basan en su participación en actividades habituales, pero no se especifica por qué esas actividades constituían actos delictivos. Sin embargo, teniendo en cuenta hasta qué punto está extendido el movimiento de Fethullah Gülen, tal como documenta el informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa citado anteriormente, “sería excepcional que, de un modo u otro, un ciudadano turco nunca hubiese tenido ningún tipo de contacto o trato con ese movimiento”²⁰. Ese parece ser el caso del Sr. Komiş. Además, el Grupo de Trabajo toma en cuenta, en particular, el informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, que visitó Turquía en noviembre de 2016 y constató numerosos casos de detenciones basadas exclusivamente en la presencia de ByLock en el ordenador de los acusados y en pruebas ambiguas²¹. El Grupo de Trabajo también toma conocimiento de las recientes conclusiones del Comité de Derechos Humanos en la comunicación núm. 2980/2017, en las que dictaminó que el mero uso de la aplicación ByLock no era base suficiente para la detención y reclusión de una persona²².

93. En el presente caso, el Grupo de Trabajo tiene claro que, incluso aunque el Sr. Komiş hubiera utilizado la aplicación ByLock, lo habría hecho simplemente en ejercicio de su libertad de expresión, un derecho amparado por el artículo 19 del Pacto. El Grupo de Trabajo recuerda que no es la primera vez que examina la detención y el enjuiciamiento de ciudadanos turcos aduciendo como motivo el pretendido uso de la aplicación ByLock como la principal manifestación de una presunta actividad delictiva²³. Asimismo, recuerda que en esos casos, y ante la falta de una explicación concreta de cómo el presunto uso de la aplicación de comunicaciones ByLock bastaba para determinar que el interesado había incurrido en actividad delictiva, llegó a la conclusión de que la detención había sido arbitraria. El Grupo de Trabajo lamenta que las autoridades turcas no hayan respetado los puntos de vista expresados en esas opiniones y que el presente caso siga esa misma pauta.

94. El Grupo de Trabajo concluye que la detención y privación de libertad del Sr. Komiş fueron consecuencia de su ejercicio de los derechos garantizados por el artículo 19 del Pacto y se inscriben en la categoría II. El Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión para que lo examine en mayor profundidad.

iii. Categoría III

95. Habida cuenta de su conclusión de que la privación de libertad del Sr. Komiş es arbitraria por cuanto se inscribe en la categoría II, el Grupo de Trabajo desea recalcar que este no tendría que ser juzgado. Sin embargo, el juicio se está celebrando y la fuente ha alegado que se han producido vulneraciones del derecho del Sr. Komiş a un juicio imparcial que confieren a su detención carácter arbitrario en virtud de la categoría III del Grupo de Trabajo. El Gobierno niega esas alegaciones.

96. La fuente sostiene que se ha denegado al Sr. Komiş el acceso a asistencia letrada desde el momento de su detención en Turquía, y afirma también que el Sr. Komiş se encuentra privado de libertad sin cargos. Sin embargo, el Comité observa que, según el Gobierno, se asignó al Sr. Komiş un abogado del Colegio de Abogados de Ankara y también se le notificaron los cargos que se le imputaban. Además, el Gobierno ha explicado en detalle el procedimiento judicial en curso contra el Sr. Komiş. Teniendo esto presente, el Grupo de Trabajo no puede formular ninguna declaración concluyente al respecto.

97. Sin embargo, el Grupo de Trabajo observa que el Sr. Komiş lleva alrededor de un año en prisión preventiva, lo cual no constituye automáticamente una vulneración del

¹⁹ *Ibid.*, párr. 21.

²⁰ *Ibid.*, párr. 20.

²¹ A/HRC/35/22/Add.3, párr. 54.

²² CCPR/C/125/D/2980/2017.

²³ Opiniones núms. 42/2018, 44/2018, 29/2020 y 30/2020.

artículo 14, párrafo 3 c) del Pacto, ya que pueden existir razones legítimas que justifiquen esa dilación. No obstante, observa también que, en el presente caso, el Sr. Komiş fue privado de libertad y sometido a prisión preventiva únicamente por ejercer sus derechos protegidos en virtud del Pacto. Por consiguiente, el concluye que la prisión preventiva del Sr. Komiş constituyó una vulneración del artículo 14, párrafo 3, del Pacto²⁴.

98. Además, el Grupo de Trabajo observa que no se han impugnado las alegaciones relativas a una declaración hecha por las fuerzas de seguridad, a través de la Agencia Anadolu, en la que se describía la detención y el traslado del Sr. Komiş como una operación de la Organización Turca de Inteligencia y se afirmaba que “las fuerzas de inteligencia detuvieron al llamado líder de la Organización Terrorista Gulenista (FETÖ) en Malasia en una operación y lo llevaron de vuelta a Turquía”. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que se denegó al Sr. Komiş el derecho a la presunción de inocencia, lo que constituye una vulneración del artículo 14, párrafo 2, del Pacto.

99. Por último, el Grupo de Trabajo ya ha establecido la responsabilidad del Gobierno de Turquía en relación con la extradición de la familia Komiş desde Malasia. Por consiguiente, teniendo presente la inobservancia de los procedimientos de extradición aceptados —que habrían permitido al Sr. Komiş disfrutar de las debidas garantías procesales— y las vulneraciones del artículo 14, párrafos 2 y 3, del Pacto, el Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad es arbitraria y se inscribe en la categoría III también por lo que respecta a Turquía.

iv. Categoría V

100. Por último, la fuente ha alegado que la detención del Sr. Komiş se inscribe en la categoría V por cuanto constituye discriminación por motivos de opinión política o de otra índole. El Gobierno impugna esa alegación, argumentando que su privación de libertad obedeció a su presunta pertenencia a una organización terrorista.

101. El presente es el caso más reciente relativo a personas con presuntos vínculos con el movimiento Gülen que se ha presentado al Grupo de Trabajo en los tres últimos años²⁵. En todos los casos, el Grupo de Trabajo determinó que la detención de las personas afectadas fue arbitraria. Observa una tendencia contra las personas presuntamente vinculadas al movimiento Gülen, a quienes se discrimina por sus opiniones políticas o de otra índole. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno de Turquía detuvo al Sr. Komiş por un motivo discriminatorio prohibido y que tal detención se inscribe en la categoría V. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

102. El Grupo de Trabajo ha observado que en los tres últimos años se ha producido un aumento apreciable del número de casos de detención arbitraria en Turquía que se le han remitido²⁶. El Grupo de Trabajo expresa preocupación por el patrón que siguen todos esos casos y recuerda que, en determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otras situaciones graves de privación de libertad en violación de las normas del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad.²⁷

103. El Grupo de Trabajo agradecería la oportunidad de realizar una visita a Turquía. Dado que ha transcurrido un período considerable desde su última visita a Turquía, que tuvo lugar en octubre de 2006, y que el país ha cursado una invitación permanente a los procedimientos especiales, el Grupo de Trabajo estima que sería conveniente realizar otra visita, de conformidad con los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

²⁴ Véanse también Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35, párr. 37; y observación general núm. 32, párr. 35.

²⁵ Opiniones núms. 1/2017, 38/2017, 41/2017, 11/2018, 42/2018, 43/2018, 78/2018, 10/2019, 53/2019, 79/2019, 2/2020, 29/2020, 30/2020 y 47/2020.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 47/2012, párr. 22.

Decisión

104. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

Por lo que respecta a Malasia

La privación de libertad en Malasia de Arif Komiş, Ülkü Komiş y cuatro menores de edad cuyos nombres conoce el Grupo de Trabajo es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 6, 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

Por lo que respecta a Turquía

La privación de libertad de Arif Komiş, Ülkü Komiş y cuatro menores de edad cuyos nombres conoce el Grupo de Trabajo es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 6, 8, 9, 10 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafos 1 y 3, 9, 14, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

105. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Malasia y al Gobierno de Turquía que adopten las medidas necesarias para remediar sin dilación la situación del Sr. Komiş, la Sra. Komiş y los cuatro menores de edad cuyos nombres conoce el Grupo de Trabajo y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

106. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería: a) que el Gobierno de Turquía pusiera inmediatamente en libertad al Sr. Komiş; y b) que el Gobierno de Turquía y el Gobierno de Malasia concedieran al Sr. Komiş, la Sra. Komiş y los cuatro menores de edad cuyo nombre conoce el Grupo de Trabajo el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, entre otras cosas por las secuelas que haya dejado en su integridad psicológica el hecho de haber sido detenidos, reclusos en un lugar secreto y expulsados. En el contexto actual de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que esta plantea para los lugares de detención, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno de Turquía a que adopte medidas urgentes para que el Sr. Komiş sea puesto en libertad de inmediato.

107. El Grupo de Trabajo insta a los dos Gobiernos a que lleven a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de la familia Komiş y adopten las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

108. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y a la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

109. El Grupo de Trabajo solicita a los dos Gobiernos que difundan la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

110. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y los Gobiernos que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Arif Komiş y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a la familia Komiş;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos de la familia Komiş y, de ser así, el resultado de la investigación;

d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Malasia y Turquía con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

111. Se invita a los Gobiernos a que informen al Grupo de Trabajo de las dificultades que puedan haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indiquen si necesitan asistencia técnica adicional, por ejemplo mediante una visita del Grupo de Trabajo.

112. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y a los Gobiernos que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

113. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado²⁸.

[Aprobada el 26 de agosto de 2020]

²⁸ Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.